

# CORTE DE APELACIONES

Caratulado:

Rol:

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS 1502-2023**

Fecha de  
sentencia: 05-04-2024

Sala: Primera

Tipo  
Recurso: Protección-Protección

Resultado  
recurso: ACOGIDA

Corte de  
origen: C.A. de Puerto Montt

Cita  
bibliográfica: MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS: 05-04-2024  
(-), Rol N° 1502-2023. En Buscador  
Corte de Apelaciones  
(<https://juris.pjud.cl/busqueda/u?dfhu6>). Fecha  
de consulta: 08-04-2024



Utilice una aplicación QR  
desde su teléfono para  
escanear este código y  
consultar la sentencia desde  
el sistema.

[Ir a Sentencia](#)



Puerto Montt, cinco de abril de dos mil veinticuatro.

Vistos.

A folio 1 comparece el abogado Marcelo Brunet Bruce, con domicilio en Huérfanos 1055, oficina 703, Santiago, en favor de -----, domiciliada en -----, e interpone recurso de protección en contra de Tomás Gárate Silva, arquitecto, en su calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, ambos con domicilio en calle San Francisco N° 413, Puerto Varas, fundado en el acto, que califica de ilegal y arbitrario, consistente el Decreto Municipal N° 4645 de fecha 30 de noviembre de 2023, que dispuso la no renovación de su contrato en la unidad de asesoría jurídica del Departamento de Salud Municipal.

Explica que su representada comenzó a prestar servicios en el Departamento de Salud Municipal de Puerto Varas el 21 de noviembre de 2018, mediante prestación de servicios a honorarios, con una jornada de 22 horas semanales, renovándose para los años 2019, 2020, 2021 y 2022, y también en enero y febrero de 2023. Indica que, en forma paralela, a contar de enero de 2019 fue contratada a plazo fijo como asesora jurídica por el Departamento de Salud Municipal de Puerto Varas, bajo el régimen de la Ley 19.378 sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud, con una jornada de 11 horas semanales. Señala que tal nombramiento fue renovado para los años 2020 y 2021 en las mismas condiciones, que a contar de 2022 se le renovó aumentando su jornada semanal a 22 horas y, que desde el nombramiento del 1 de marzo de 2023 su jornada se aumentó a 44 horas semanales. Asegura que durante el desempeño de sus labores se encontraba bajo la recepción de instrucciones y se encontraba bajo la dependencia directa de la Directora del Departamento de Salud y no del Alcalde, ya que la salud primaria es un servicio traspasado a las municipalidades y, de acuerdo con lo resuelto por Contraloría, los funcionarios no pueden prestar servicios en dependencias municipales, por lo que no podría centralizar la asesoría jurídica no está permitido como se indica en el Decreto Alcaldicio.

Luego se refiere a diversos considerandos específicos del Decreto Alcaldicio impugnado. En primer lugar, respecto de los considerandos 2 y 3, afirma que pretenden constituir una realidad que no se condice con los hechos. De esta manera, explica que el considerando 2° se refiere a su nombramiento en el cargo de asesora de la Unidad Jurídica del Departamento de Salud

Municipal, cargo que asegura se cumplió cabalmente, siendo demostrativo de ello, los sucesivos nombramientos en dicha función, sus calificaciones siempre en lista 1, la designación como nscal de sumario en octubre de 2023 y el mandato judicial que el Alcalde le connrió, todo lo cual denota connanza en sus capacidades. Respecto del considerando 3, que indica que las municipalidades dennirán la estructura organizacional de los establecimientos de atención primaria de salud; anrma que ello es discutible porque los funcionarios de la DESAM tienen sus cargos aprobados por el Servicio de Salud del Reloncaví y son parte de la dotación. En este mismo sentido, anrma que la Unidad de Control Interno no quiso visar el decreto de su no renovación porque consideró que no correspondía y que incluso envió un oncio a la Unidad Jurídica con las observaciones acerca de porqué los funcionarios de la Ley N° 19.378 no eran de connanza del Alcalde como indica el decreto.

Enseguida alega que el numeral 6 del Decreto Municipal, que señala que los resultados de la asesoría jurídica del DESAM tienen una incidencia directa en las decisiones que corresponde adoptar al Alcalde y consecuentemente en la responsabilidad asociada a los actos administrativos; el numeral 7, que se renere a la disparidad de criterios entre su representada con el Departamento de Asesoría Jurídica Municipal y la Dirección de Control Interno, lo que supuestamente habría redundado en la necesidad de duplicar e incluso triplicar las labores de análisis de legalidad de los actos administrativos; y lo dispuesto en el numeral 8 del Decreto Alcaldicio, que señala que por tales razones se decidió centralizar y unincar dichas labores en el Departamento de Asesoría Jurídica; son consideraciones que se contradicen con la proposición que el propio alcalde hizo al Servicio de Salud para la dotación de personal de atención primaria de salud, en la cual propuso a un abogado con 44 horas semanales, según consta en la Resolución Exenta N° 5225 del 30 de noviembre de 2023 de dicho Servicio.

Posteriormente se renere a los considerandos 9 al 11 que señalan que, la decisión también se funda en la pérdida de exclusiva connanza por parte del Alcalde en la asesoría prestada por su representada, citando al efecto el artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades que establece que tendrán la calidad de funcionarios de exclusiva connanza del alcalde, las personas que sean designadas como titulares en los cargos de secretaría comunal de planincación, y en aquellos que impliquen dirigir las unidades de asesoría jurídica, de salud y educación y demás incorporados a su gestión, y de desarrollo comunitario. De este modo, respecto de este grupo de considerandos, alega que su representada no tiene la calidad de funcionaria de exclusiva connanza del Alcalde porque no dirige ninguna de las unidades municipales a las que se renere la norma, además que tampoco ejerce el cargo como planta ni

tampoco en su nombramiento se señaló su calidad de funcionaria de confianza. Concluye que el Decreto Municipal objeto del recurso de protección carece de fundamentación porque los hechos en los que se funda no son verdaderos, no siendo suficiente que formalmente se expresen razones, ya que ellas deben existir, citando jurisprudencia en tal sentido.

Por otro lado, en relación con las formalidades del decreto alcaldicio, afirma que éste no fue notificado practicada en presencia de la Directora del DESAM, sino que solo en presencia de la Administradora Municipal y la Secretaria Municipal (S). En segundo lugar, reprocha que el decreto no contenga el régimen recursivo aplicable, lo que es exigido tanto por el Dictamen E156769 de 2021 de Contraloría General de la República como por el artículo 41 de la ley 19.880 y, en tercer lugar, alega que dicho Decreto tampoco cuenta con el Visto Bueno y timbre de la Unidad de Control Interno.

Por último, afirma que de acuerdo con los años que la señora Rosmanich ha prestado servicios para el Departamento de Salud y el número de renovaciones de sus nombramientos, considera que debe operar el principio de la confianza legítima de que su nombramiento sería nuevamente renovado.

Respecto de las garantías vulneradas, asevera que se ha conculcado el derecho a la vida e integridad física y síquica debido a la injusta calificación que ha importado un tormento injustificado que solamente se explica por el capricho en el actuar del Servicio, lo que señala constar en el certificado que adjunta. También aduce una vulneración a la Igualdad ante la Ley, afirmando que su representada fue discriminada por motivos políticos, al ser militante de Renovación Nacional, ex candidata a diputada y ex Seremi del Trabajo del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Además, aduce vulneración a la garantía de no ser juzgada por comisiones especiales y a la protección de la honra por haber sido sancionada en un procedimiento injusto.

Pide: a) Acompaña: 1.- Decreto Alcaldicio N° 4645 de fecha 30 de noviembre de 2023 suscrito por el Alcalde de la I. Municipalidad de Puerto Varas, Tomás Gárate. 2.- Seis convenios entre la Municipalidad de Puerto Varas y recurrente. 3.- Decreto 671 de prelación de calificaciones 2019-2020. 4.- Decreto 1141 de prelación de calificaciones de agosto 2018 a sept de 2019. 5.- Decreto 2711 que Aprueba Reglamento Interno Depto. Salud año 2023. 6.- Decreto 4219 que aprueba prelación de calificaciones de sept. de 2021 a agosto de 2022. 7.- Mandato Judicial. 8.- Nombramientos Andrea Rosmanich. 9.- Resolución Exenta 5225 del Servicio de Salud sobre Dotación 2024.

A folio 2 se declara admisible el recurso de protección y se pide informe a la recurrida.

A folio 11 el abogado José Tomás de la Cerda Lavín, en representación de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas evacua informe. Primeramente, alega que el recurso de protección no es la vía idónea para la impugnación de tales decisiones, citando una sentencia de la Excelentísima Corte Suprema que confrmó un fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago que razonó en tal sentido.

Luego indica que la no renovación de la contrata se basó en que los servicios de la recurrente dejaron de ser necesarios, debido a la decisión de centralizar y unincar la asesoría jurídica de salud en el Departamento de Asesoría Jurídica Municipal por diversas discordancias de criterio. En este sentido, detalla que el 27 de abril de 2023, la Directora de Control se abstuvo de visar el Decreto que pagaba las remuneraciones del personal de atención primaria de salud, ya que no se había cumplido con formalizar la estructura organizacional, según lo instruido más de un año antes. Luego indica que, cuando se intentó cumplir con tal exigencia, se tuvo que devolver el borrador del Reglamento propuesto, lo que denota un actuar negligente de la Asesora Jurídica al no cumplir con el principio de legalidad. Posteriormente, indica que el 7 de noviembre de 2023, la Directora de Control Interno nuevamente dio cuenta de una infracción al principio de legalidad en relación con el término anticipado de la contrata de una funcionaria, quien había sido desvinculada por salud incompatible, pero sin el correspondiente certincado de la COMPIN, que exige la ley. Por último, relata que el 17 de noviembre de 2023, la Directora de Control devolvió un Decreto de Contratación Directa por haberse omitido la aprobación del Concejo Municipal, lo cual gatilló la revisión de una serie de actos administrativos relacionados con tratos directos, de los cuales al menos 4 debieron haberse efectuado mediante licitación, por lo que se incumplieron las disposiciones de la Ley N° 19.886 Sobre Compras Públicas. Concluye que ante la constatación de tal disparidad o discrepancia de criterios entre la Dirección de Control Interno, el Departamento de Asesoría Jurídica y la Asesoría Jurídica del DESAM, decidió su centralización y unincación. Anrma que ello es una atribución del Alcalde como superior jerárquico de la administración de la atención primaria de salud, lo que se expone en el Reglamento Interno del DESAM y en el artículo 56° de la Ley N° 19.378.

Por otro lado, señala que la decisión de no renovar la contrata también dice relación con una pérdida de connanza en las aptitudes personales de la Asesora Jurídica, citando para el efecto lo dispuesto en el artículo 22° del Decreto Ley N° 3.551 que Fija Normas Sobre Remuneraciones y

Personal Para el Sector Público que establece que los empleados de las Municipalidades, con excepción de los Jueces de Policía Local, serán de exclusiva confianza del Alcalde, quien podrá nombrarlos, promoverlos y removerlos con entera independencia de otra autoridad, a lo cual agrega lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N° 18.695 que establece que tendrán la calidad de funcionarios de exclusiva confianza del alcalde, las personas que sean designadas como titulares en los cargos de secretario comunal de planificación, y en aquellos que impliquen dirigir las unidades de asesoría jurídica, de salud y educación y demás incorporados a su gestión.

Finalmente, en lo relativo a las garantías constitucionales, niega una afectación al derecho a la vida e integridad física y psíquica de la recurrente, haciendo presente que no se acompañó el certificado que daría cuenta del grave menoscabo en la salud psíquica al que se renere el recurso de protección y, en todo caso, que no se explicó cómo la decisión de no renovar una contratación por pérdida de confianza importa un “tormento injustificado” como lo califica la recurrente.

En relación con la afectación al derecho a la Igualdad ante la Ley fundada en discriminación por razones políticas, afirma que ello es una mera suposición, careciendo tal acusación de fundamento ya que de haber sido así, habría sido desvinculada al momento en que asumió como Alcalde, además, hace presente que no milita en ningún partido político y que el equipo del Alcalde se integra por militantes de todo el espectro político. También se niega cualquier afectación al debido proceso y al derecho a la honra.

Pide el rechazo del recurso de protección, con costas.

Acompaña: 1.- Ordinario N° 096 de 27 de abril de 2023 de la Directora de Control Interno de Municipalidad de Puerto Varas a la Administradora Municipal, Daniela Hidalgo Manosalva, y a la Directora de la DESAM, María Victoria Carrasco, que observa “Decreto que aprueba remuneraciones”. 2. Ordinario N° 71 de fecha 10 de abril de 2023, de la Directora de Control Interno a la Administradora Municipal y Directora DESAM, que remite informe anual sobre auditoría N° 1 de 2022, sobre evaluación del proceso de pago de remuneraciones y descuentos ejecutados durante el 2021. 3. Memorandum de Devolución N° 167 de 18 de mayo de 2023 de la Dirección de Control Interno. 4. Ordinario N° 336 de fecha 7 de noviembre de 2023 de la Dirección de Control Interno. 5. Memorandum de Devolución N° 445 de 17 de noviembre de 2023 de la Dirección de Control Interno. 6. Memorandum N° 81 de 30 de octubre de 2023 del Departamento de Asesoría Jurídica.

A folio 12 se traen los autos en relación.

A folio 13 se dispone la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

A folio 18 la parte recurrente acompaña el Ord. N° 367 de la Dirección de Control Municipal de la I. Municipalidad de Puerto Varas, que dispone la no renovación del nombramiento a contrata de doña Andrea Rosmanich Rojas, de fecha 29 de noviembre de 2023.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva o amenace ese atributo.

Segundo: Que, la actora ha invocado como acto arbitrario o ilegal, el Decreto Municipal N° 4645 de fecha 30 de noviembre de 2023, dictado por la recurrida, que dispuso la no renovación de su contrata en la unidad de asesoría jurídica del Departamento de Salud Municipal, en circunstancias que se desempeña desde el año 2019 en la Municipalidad de Puerto Varas, en calidad a contrata y que, de acuerdo al tiempo transcurrido, cuenta con lo que en doctrina se denomina connanza legítima, por lo que se le han vulnerando las garantías contempladas en el artículo 19 números 1, 2, 3 y 4 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, de los antecedentes que obran en estos autos, apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden establecer -en lo medular- los siguientes hechos:

1.- Por Decreto Alcaldicio N° 1195, de fecha 20 de febrero de 2019, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de Puerto Varas, se dispuso el nombramiento de la recurrente, en calidad de contrata a plazo njo, en el Departamento de Salud de Puerto Varas, entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019..

2.- Por Decreto Alcaldicio N° 0415, de fecha 24 de enero de 2020, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de Puerto Varas, se dispuso el nombramiento de la recurrente, en calidad de contrata a plazo njo, en el Departamento de Salud de Puerto Varas, entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020.

3.- Por Decreto Alcaldicio N° 0755, de fecha 4 de febrero de 2021, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de Puerto Varas, se dispuso el nombramiento de la recurrente, en calidad de contrata a plazo njo, en el Departamento de Salud de Puerto Varas, entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.

4.- Por Decreto Alcaldicio N° 0081, de fecha 12 de enero de 2022, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de Puerto Varas, se dispuso el nombramiento de la recurrente, en calidad de contrata a plazo njo, en el Departamento de Salud de Puerto Varas, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

5.- Por Decreto Alcaldicio N° 0332, de fecha 24 de enero de 2023, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de Puerto Varas, se dispuso el nombramiento de la recurrente, en calidad de contrata a plazo njo, en el Departamento de Salud de Puerto Varas, entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

6.- Por Decreto Alcaldicio N° 1500, de fecha 6 de abril de 2023, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de Puerto Varas, se dispuso poner término al nombramiento de la recurrente, Por Decreto Alcaldicio N° 0332, de fecha 24 de enero de 2023, en calidad de contrata a plazo njo, en el Departamento de Salud de Puerto Varas, entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

7.- Por Decreto Alcaldicio N° 4645, de fecha 30 de noviembre de 2023, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad de Puerto Varas, se dispuso la no renovación de la contrata de la recurrente, abogada, contrata a plazo njo, para el cargo de asesor jurídico, por no ser necesarios sus servicios para la siguiente anualidad, así como por no contar con la exclusiva connanza del jefe de servicio.

Cuarto: Que, en primer término, se debe dilucidar la naturaleza del vínculo de la recurrente con la Municipalidad de Puerto Varas, empleo a “contrata”, el que se encuentra regulado en la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.

La letra c) del artículo 3 de la Ley 18.834, indica que: “Empleo a contrata: Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”.

El mismo texto legal determina en su artículo 9, en relación a la permanencia, que “los empleos a



contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley (...)

Como puede advertirse, la característica principal de un funcionario público que ejerce sus labores a contrata es la transitoriedad en la prestación de los servicios, lo que trae como consecuencia que éste no sirva el cargo en propiedad, ni goza de estabilidad en el empleo, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los funcionarios de planta.

Quinto: Que, como se ha resuelto reiteradamente por la Excma. Corte Suprema respecto del ejercicio de la facultad de poner término anticipado a la contrata anual, es necesario distinguir entre aquellas relaciones que han tenido una extensión temporal mayor en el tiempo, toda vez que dichas personas, según la jurisprudencia judicial y administrativa, se encuentran protegidas por el principio de confianza legítima.

En efecto, el referido principio, aplicado en materia administrativa, busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesionen sus derechos.

En esta materia, se ha resuelto que la decisión de no renovar una contrata, respecto de personas que se han vinculado con la Administración por un determinado número de años, vulnera el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el periodo cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura a juicio de ambas jurisdicciones, cuando concurre, un elemento temporal estabilizador y que le resta temporalidad a la vinculación estatutaria, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas.

De esta forma, la Excelentísima Corte Suprema, ha fijado en cinco años el criterio para que opere la confianza legítima de funcionarios públicos a contrata (Palma/Instituto Nacional de Deportes de Chile, Rol Protección N° 26.301-2023), principio que, de acuerdo a los pronunciamientos de la Contraloría General de la República, eleva el estándar de argumentación que debe contener el acto de autoridad que materializa la decisión de no renovar o terminar anticipadamente el vínculo reglamentario existente, por medio de la motivación y comunicación del acto administrativo al afectado.

La naturaleza transitoria de un vínculo a contrata no otorga "propiedad en el empleo" ni menos una "inamovilidad", dado que esta última es una prerrogativa de quienes integran una planta acogidos a la carrera funcionaria. Prerrogativas que no gozan los funcionarios a contrata, ya que, dada la transitoriedad de dicho régimen, no les aplica el régimen de la carrera funcionaria tal como se señala en los artículos 44 a 51 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Sexto: Que, realizados estos alcances, se puede dejar asentado que, de acuerdo a la documentación acompañada, y los hechos consignados en el motivo tercero, se desprende que la recurrente, se desempeña en calidad de contrata a plazo njo, en el Departamento de Salud de la Municipalidad recurrida, al menos desde el día 1 de enero de 2019, en el cargo de asesor jurídico, categoría B, nivel 14, con una jornada semanal de 4 horas.

Séptimo: Que, como se dijo, el empleo a contrata puede terminarse simplemente por la no renovación de su contrato en esa calidad jurídica.

Sin perjuicio de lo razonado, si bien se trata de una potestad para el Jefe de Servicio, la decisión de renovar o no los empleos a los funcionarios que se encuentran en esa situación jurídica, no es menos cierto que lo que se espera de la resolución o decreto que pone fin al contrato, es que dicho acto administrativo sea fundado.

Atendido lo anterior, y para dilucidar si existe la fundamentación necesaria, hay que analizar el Decreto Alcaldicio N° 4645, de fecha 30 de noviembre de 2023, dictado por el Alcalde de la Municipalidad de Puerto Varas, que resuelve la no renovación del empleo a contrata de la recurrente.

Los fundamentos del Decreto recurrido, en lo que interesa, señala:

“(…) Es menester relevar la existencia de la disparidad de criterios en los análisis jurídicos realizados por la Asesora Jurídica de Salud para la elaboración de distintos actos administrativos relacionados con la gestión y administración del Departamento de Salud con otras unidades de apoyo interno de esta Ilustre Municipalidad tales como, el Departamento de Asesoría Jurídica Municipal y la Dirección de Control Interno, refrendado, entre otros, en los Ordinarios N° 96 de 27 de abril de 2023; N° 167 de 18 de mayo de 2023; N° 336 de 7 de noviembre de 2023; y N° 445 de 17 de noviembre de 2023, todos ellos de la Dirección de Control Interno; así como también del Memorándum N° 81 de fecha 30 de octubre de 2023 del Departamento de Asesoría Jurídica de esta Municipalidad, lo cual ha redundado en la necesidad de duplicar e incluso triplicar las

labores de análisis de legalidad de dichos actos administrativos, atentando contra los principios de eficiencia y economía que rige a los órganos de la Administración del Estado (...) bajo el anterior supuesto, esta administración ha tomado la determinación de centralizar y unificar la asesoría jurídica respecto de las materias legales competentes al Departamento de Salud Municipal y sus unidades, disponiendo que, a contar del 1 de enero del año 2024, el conocimiento, evaluación y análisis de dichas materias corresponderá al Departamento de Asesoría Jurídica de esta Ilustre Municipalidad, razón por la cual ha decidido no renovar los servicios de doña Andrea Dinka Rosmanich Rojas, al no ser éstos necesarios a contar de dicha anualidad (...) se hace necesario fundar también la presente decisión, en la pérdida de exclusiva confianza por parte del Alcalde en la asesoría prestada por la funcionaria a la Municipalidad (...) DISPONGASE la no renovación de la contrata (...) por no ser necesarios sus servicios para la siguiente anualidad, así como por no contar la funcionaria con la exclusiva confianza del Jefe de Servicio (...).”.

Octavo: Que, de lo anterior puede desprenderse que el reseñado acto administrativo sin bien señala un fundamento para proceder a la desvinculación de la recurrente, a juicio de esta Corte, tales hechos no resultan proporcionales a la medida adoptada, desde que la funcionaria no ha tenido oportunidad alguna de ejercer su defensa ante tales imputaciones o argumentar respecto de las conductas que se le atribuyen o de la pérdida de confianza del alcalde a la que se ha acudido, desde ese punto de vista, resulta arbitrario el término de sus servicios.

Noveno: Que, como ya se ha dicho, tales fundamentos no resultan suficientes para la no renovación de la contrata de la recurrente, dado que ameritaba una investigación sumaria, producto de las consecuencias y efectos de lo sostenido en la resolución de fecha 30 de noviembre de 2023, de suyo graves, al atribuir “la existencia de la disparidad de criterios en los análisis jurídicos realizados por la Asesora Jurídica de Salud para la elaboración de distintos actos administrativos relacionados con la gestión y administración del Departamento de Salud con otras unidades de apoyo interno (...) lo cual ha redundado en la necesidad de duplicar e incluso triplicar las labores de análisis de legalidad de dichos actos administrativos, atentando contra los principios de eficiencia y economía que rige a los órganos de la Administración del Estado”.

De esta forma, en la especie, se debió iniciar el respectivo sumario administrativo para, en definitiva, y luego de una tramitación conforme a las normas del debido proceso, eventualmente imponer una eventual sanción por las deficiencias funcionarias atribuidas a la recurrente.

Décimo: Que, en este orden de ideas, la fundamentación del Decreto recurrido aparece endeble si se considera que la actora se viene desempeñando en esa municipalidad desde el año 2019 ininterrumpidamente hasta que se le comunica que no se le renovará su contrata, por lo que resulta inverosímil que producto de su actividad laboral se haya tenido que hasta “triplicar las labores de análisis de legalidad de dichos actos administrativos”

De otra forma, si bien el Jefe de Servicio, detenta las potestades para impulsar las acciones y medidas necesarias para garantizar la eficiencia y competencia profesional y técnica del personal integrado a sus equipos regulares de trabajo, también es cierto, que para hacer uso de la facultad de no renovar la contrata tiene que dictar el correspondiente Decreto con motivaciones, fundamentos plausibles, y objetivamente verificables, mediante un acto administrativo que posea la fundamentación necesaria, toda vez que los motivos que se expresan en dicha resolución se fundan en hechos que no pasan de ser generalidades que pudieran tener diversas lecturas o interpretación, en cuanto a la responsabilidad que pudiere corresponderle a la funcionaria, sobre todo si se considera que los hechos atribuidos a la actora no se desprenden o no encuentran claramente plasmados de la documentación allegada para su acreditación.

Como ya se dijo, la desvinculación debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, el cual debe contener en los razonamientos los hechos, objetivamente comprobables, y fundamentos de derecho en que se apoya, de acuerdo a los artículos 11 y 41 de la ley N° 19.980, por consiguiente, resulta insuficiente las fundamentaciones con expresiones genéricas, remitidas a hechos que se detallan en actos administrativos diversos, o que pudieran generar diversas interpretaciones, como allí se señala, básicamente porque la circunstancia de que “las contratas” sean esencialmente transitorias no significa que tengan un carácter precario y queden apartadas del amparo del imperio del derecho.

Undécimo: Que, en este escenario, y por otra parte, no se puede dejar de tener en cuenta, todo el tiempo que la recurrente se ha desempeñado en la Municipalidad de Puerto Varas, así como su trayectoria en la misma.

En efecto, de acuerdo a la documentación acompañada, la actora se desempeña desde el año 2019 de forma continua, sin interrupciones en sus nombramientos, y además -y principalmente- no ha sido sometida a sumario o calincada en forma diciente, lo que queda demostrado con los listados de calincaciones acompañados.

Este aspecto denota que siempre ha tenido un buen desempeño y comportamiento en el

transcurso de su vinculación con la administración, lo que da cuenta que el actuar de la recurrida, al no renovar su contrata, después de tantos años, es solamente de forma antojadiza o arbitraria, puesto que en el decreto, si bien se citan antecedentes para arribar a la decisión, no se hace alusión a ningún aspecto laboral concreto, que sea de exclusiva responsabilidad de la recurrente, por el que se tenga que prescindir de la contrata de la misma.

Duodécimo: Que, como corolario de lo hasta aquí se ha razonado, del tenor del ordinario N° 367 de la Dirección de Control Municipal de la Municipalidad de Puerto Varas, que se pronuncia acerca del Decreto que dispone la no renovación del nombramiento a contrata de doña Andrea Rosmanich Rojas -y que se ha recurrido en la especie- se concluye que sus fundamentos no se ajustan a los supuestos que permiten poner término a la relación laboral de la recurrente, mencionando además como fundamentos, en síntesis, que la funcionaria goza de connanza legítima; y que su cargo se limita sólo a asesorar en materias legales al director del DESAM, y no al Alcalde, como sí ocurre con los funcionarios de la Unidad de Asesoría Jurídica de la municipalidad, de manera que con ello se desvirtúan los argumentos contenidos en el acto recurrido.

Décimo Tercero: Que, de esta forma, considerando lo expuesto, si bien es posible anrmar que la recurrida dio cumplimiento a la jurisprudencia administrativa aplicable en materia de no renovación del vínculo laboral del personal a contrata, por cuanto manifestó, mediante el singularizado acto administrativo, los fundamentos de hecho y de derecho que sustentaron la decisión objetada, ésta no resultó verídica, desde que no puede atribuirse las eventuales denciencias que allí se consignan a la responsabilidad exclusiva de la actora, o bien, sustentarla en la trayectoria profesional y/o comportamiento funcionario de la recurrente, y además, una de sus premisas resultó errónea, en el sentido de haberse consignado que la funcionaria tenía una vinculación laboral estrecha con la máxima autoridad comunal, siendo que -en los hechos- sólo dependía del jefe de servicio de unas de las unidades del municipio, de manera que su desvinculación resultó arbitraria, lo que deviene en que la acción de protección habrá de ser acogida.

Por estas consideraciones y atendido el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se declara que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido por ----, en contra de Tomás Gárate Silva, en su calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas, y en consecuencia se deja sin efecto el Decreto Municipal N° 4645

de fecha 30 de noviembre de 2023, que dispuso la no renovación de su contrata en la unidad de asesoría jurídica del Departamento de Salud Municipal, debiendo volver las partes a la misma situación en que se encontraban con antelación a la dictación del mencionado decreto, esto es, ser reincorporada a sus funciones laborales en la entidad recurrida.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Fiscal Judicial (S) Rodolfo Maldonado Mansilla.

Rol N° Protección 1502-2023.